

ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN LA JURISPRUDENCIA SOBRE INDEXACIÓN DE DERECHOS LABORALES

IVÁN DAVID ORTIZ PALACIOS*

Este escrito debe ser leído más como un mapa general de una escala inmensa donde los detalles no son susceptibles de reconocimiento, ya que sólo lo muy significativo del relieve aparece en él. La temática de la indexación de acreencias laborales en la jurisprudencia nacional, no se presentará en detalle, tan sólo sus elementos más representativos en seis acápites que se desarrollarán así: el primero permitirá otear la indexación en una breve historia legal y constitucional; el segundo referenciará la jurisprudencia civil sobre la revaluación judicial de créditos como antecedente de la jurisprudencia laboral sobre indexación; el tercero versará sobre la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre la revaluación judicial de acreencias; el cuarto señalará la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la indexación; el quinto se referirá a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre indexación; finalmente en el sexto se enunciarán elementos para una crítica de la jurisprudencia sobre la indexación.

1. La protección legal y constitucional de las acreencias laborales y la desvalorización de la moneda

El sistema de protección de los derechos y créditos laborales estatuido en la regulación laboral

de mitad de siglo en Colombia (Ley 6 de 1945, Decreto 2127 de 1945 y decretos 2663 y 3747 de 1950), en el aspecto económico, se basaba sustancialmente en sanciones dinerarias tasadas en proporción al valor determinable en días de salario del trabajador vulnerado. Esta ecuación se realizaba con el salario deven-gado a la fecha, cuyo pago debía efectuarse en moneda de curso legal. Los montos reparaban integralmente los perjuicios ocasionados en el ejercicio abusivo del derecho o potestad patronal por parte del empleador público o privado.

Evidentemente el sistema legal laboral de protección de medio siglo nunca consideró como variable o perjuicio en desfavor del trabajador el envilecimiento de la moneda de curso legal, salvo la Ley 187 de 1959, que regulaba la remuneración de los trabajadores estatales y privados, estableciendo "un reajuste de los salarios mínimos en vigencia, de acuerdo con las alzas registradas en el costo de la vida desde el momento en que estos salarios fueron promulgados" (art. 6o.) y especialmente, una prima móvil al salario liquidada en proporción directa a los aumentos de los índices promedios del costo de vida (art. 7o. *ibidem*). No obstante,

* Profesor Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho. E-mail: idortiz@bacata.usc.unal.edu.co

el genuino criterio protector del trabajo frente al envilecimiento monetario no tuvo aplicación real.

En 1967, se implantó en el país una política monetaria y cambiaria, caracterizada entre otros por la introducción de la devaluación "gota a gota" (Decreto 444/67), que envilecía constantemente la moneda, afectando negativamente los derechos y créditos laborales insolutos parcial o totalmente. La reorientación del manejo monetario se consolidó en 1972 (Decreto 677) con el establecimiento del sistema de intermediación financiera "Unidades de poder adquisitivo constante (Upacs)" creado para fomentar el ahorro destinado a la actividad de la construcción, y que "para efectos de conservar el valor constante de los ahorros y de los préstamos a los que se refiere el presente Decreto, unos y otros se reajustarán periódicamente de acuerdo con las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el mercado interno, y estos reajustes se calcularán de acuerdo con la variación resultante del promedio de los índices nacionales de precios al consumidor, para empleados, de una parte, y para obreros, de otra" (artículo 3o. del Decreto 677 de 1972). La regulación económica generalizó la actualización de los créditos en proporción al envilecimiento monetario, por ejemplo, en efectos fiscales (Ley 75/86) y fijación de canon de arrendamiento (Ley 56/85).

Con todo, la fijación del salario mínimo legal no estaba normativamente vinculada a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda; consecuentemente, tampoco las pensiones de jubilación, invalidez o sobrevivientes que se reajustaban por mandato legal (Ley 10 de

*La indexación
de las acreencias y derechos
de los trabajadores,
exigibles e impagados,
representó la crisis
del nominalismo
y la vigencia del realismo*

1972 y 4a. de 1976) en proporción directa con el incremento del salario mínimo legal.

La reforma a la regulación contenciosa administrativa (Decreto Ley 01 de 1984) estatuyó la indexación o ajuste al valor en su artículo 178, el cual señala que "la liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de-

berá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor o al por mayor".

En las postrimerías de 1990 -después de la elección de los miembros de la asamblea que expediría la nueva constitución política de los colombianos- en el marco de las medidas legislativas (reforma tributaria, cambiaria, financiera, comercio exterior y laboral) para viabilizar la internacionalización de la economía, el Congreso de la República aprobó la reforma laboral (Ley 50/90); tal reforma, en cuanto al objeto de este escrito, remozó el sistema de protección de los derechos y créditos de los trabajadores con incremento en algunas indemnizaciones, pero hizo caso omiso de la reiterada jurisprudencia que consideraba la devaluación monetaria como un hecho notorio. Se desaprovechó así la oportunidad de la legalización de la indexación en materia laboral. Por tanto, el Estado debía continuar protegiendo los derechos y créditos de los trabajadores mediante la revaluación judicial sin ley.

En 1991, la nueva Constitución estableció como columnas fundantes de Estado social de derecho los

principios, valores y derechos al trabajo, la dignidad humana y la igualdad (preámbulo constitucional), y definió que son "fines esenciales del Estado" (art. 2 C.P.) la garantía y efectividad de estos principios, derechos y valores, "dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo" (preámbulo constitucional). Así mismo se impuso a la propiedad privada y a la empresa obligaciones sociales (art. 58 y 333 C.P.), y al Estado la obligación de velar "por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda" (art. 373 C.P.).

En este marco constitucional está consagrada expresamente la indexación como el derecho a la movilidad de la remuneración y el reajuste periódico de las pensiones (art. 53 C.P.) y por tanto los empleadores deben respetarlo como derecho ajeno (art. 95.1 C.P.) y no vulnerarlo con el abuso de sus derechos patronales (art. 95.1 C.P.). Como derecho constitucional, la indexación es plenamente garantizada frente a cualquier normatividad, en razón a la primacía e integralidad de la Constitución (art. 4 y 241 C.P.).

La indexación ha sido desarrollada en la legislación postconstitucional como en la Ley 100 de 1993 artículos 14, 36 y 117, donde el concepto de actualización de sumas dinerarias se materializa en el mantenimiento "del poder adquisitivo constante", siempre en relación con la variación del índice precios al consumidor, certificado por el DANE.

2. Antecedentes jurisprudenciales

En la estructura organizativa del Estado colombiano, la rama judicial del poder público ha sido ejercida históricamente, para asuntos relacionados con la actualización de derecho y créditos laborales, por las jurisdicciones ordinaria, contencioso adminis-

trativa y, a partir de 1991, por la constitucional¹. Por su incidencia en la actual tendencia jurisprudencial de la Sala Plena Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se incluyen los antecedentes de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

2.1. *Jurisprudencia civil sobre de la revaluación judicial de créditos*

Las soluciones judiciales a la problemática generada por la desvalorización de la moneda y la consecuente consideración de la corrección monetaria, no se refieren inicialmente a los créditos laborales, sino a los conflictos jurídicos entre el capital y el capital que desata la jurisdicción civil; en efecto, la revaluación judicial de obligaciones dinerarias, se fundamentó en los siguientes aspectos:

La indexación repara los perjuicios ante una modalidad de daño emergente como es:

La desvalorización monetaria experimentada por las sumas que el comprador cumplido pagó al vendedor incumplido desde la fecha en que la entregó hasta tanto le sea devuelta, conforme a la liquidación hecha pericialmente².

El proceso de génesis jurisprudencial de la revaluación de los créditos:

En fallos de 24 de abril y 9 de julio de 1979, acudiendo a los principios generales del derecho y de una más actualizada hermenéutica de la ley, se inclinó por aceptar la corrección monetaria de determinadas obligaciones y, por ende, afirmó la crisis del nominalismo, que hasta entonces aparecía como un principio re-

1. Título VIII C.P. Art. 228 y siguientes.

2. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 9 de julio de 1979.

tor en el Código Civil colombiano y como una valla infranqueable en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias³.

El pago que extingue la obligación dineraria debe ser íntegro o completo:

Pues sobre el particular establece el inciso segundo del artículo 1626 del C.C. que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe 'y, para que sea cabal, íntegro o completo, debe hacerse, además, con sus intereses e indemnizaciones debidas, tal como reza el inciso segundo del artículo 1646 *ibídem*', cuando dispone que el pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban⁴.

El pago no libera, por ser incompleto, cuando se paga con moneda desvalorizada:

Pues en tal evento se trata de un pago ilusorio e incompleto, como acertadamente lo sostienen la doctrina y la jurisprudencia, no sólo nacional sino foránea, la cual insiste en que si la obligación no es pagada oportunamente se impone reajustarla, para representar el valor adeudado, porque esa es la única forma de cumplir con el requisito de la integridad del pago... De suerte que no resulta ser exacto y legal que el deudor moroso que paga con moneda desvalorizada, extinga en esas condiciones real e íntegramente la obligación por él debida y menos, que el pago así efectuado sea justo y equitativo, como quiera que de aceptarse obtendría un provecho indebido, producto de su propio incumplimiento y con desmedro económico para el acreedor⁵.

3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 24 de marzo de 1983.

4. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 30 de marzo de 1984.

La depreciación monetaria no requiere prueba:

Por su reiteración o cronicidad, entró según la doctrina más real y aceptable, al campo de los hechos públicos y notorios, con lo cual se está afirmando que el damnificado se encuentra relevado de su demostración⁶.

3. Jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre la revaluación judicial de créditos sin ley que la regule

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tomando como base la jurisprudencia ya referenciada en el apartado anterior, proferida por la Sala de Casación Civil, ha venido estructurando la doctrina laboral sobre indexación en los siguientes términos:

Las fuentes de la doctrina jurisprudencial laboral de la Corte Suprema de Justicia son:

Los principios del derecho del trabajo ...la jurisprudencia ...los principios de equidad y justicia ...la consagración positiva de la corrección monetaria en varios campos de la actividad civil en nuestro país ...la doctrina y la jurisprudencia extranjera ...la escasa producción doctrinal nacional ...las normas reguladoras del pago ...los principios del enriquecimiento injusto y el equilibrio contractual ...los principios constitucionales⁷.

Así, ella se ha fundamentado en el:

5. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 30 de marzo de 1984.

6. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 24 de marzo de 1983.

7. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 13 de noviembre de 1991.

Principio general de la aplicación supletoria o analógica de la ley que se encuentra establecida recientemente a nivel constitucional en el artículo 230 de la nueva Carta política y con anterioridad expresamente en el artículo 80. de la Ley 153 de 1887 y también, en el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 19⁸. Igualmente en "una modalidad de daño emergente entendido como el perjuicio que sufre el trabajador a raíz del retardo o mora del empleador al pagar un crédito laboral"⁹.

La indexación de las acreencias y derechos de los trabajadores, exigibles e impagados, representó la crisis del nominalismo y la vigencia del realismo ya que:

El nominalismo —se dice— frente a una depreciación desatada, constituye ya un dogma economicista obsoleto, una ficción injusta que afecta el funcionamiento mismo de los contratos, el necesario equilibrio entre las partes, el principio de buena fe, y que propicia el enriquecimiento injusto o incausado. Cobra fuerza así el principio del valorismo o realismo, según el cual la obligación dineraria está determinada por el poder adquisitivo de la unidad monetaria, el cual la condiciona¹⁰.

*6 Al valorar
la jurisprudencia laboral
de la Corte Suprema
de Justicia, sobre revaluación
judicial de acreencias
sin ley que la regule,
siendo ésta fundada
en los principios de justicia
y equidad, y no en la
aplicación analógica
normativa de leyes
que regulen casos o materias
semejantes, como
las de naturaleza civil
sobre el pago y el daño
emergente se ha provocado
una variación jurisprudencial
que evidencia la crisis
de la aplicación analógica
de tales normas
de naturaleza civil.⁵*

La indexación sin ley en materia laboral debe ser solventada por una revaluación judicial, en el entendido de que:

La lucha del derecho para preservar la equidad frente al fenómeno económico de la creciente devaluación de la moneda, debe darse a nivel legislativo, principalmente, pero también resulta posible y urgente planteado en el campo judicial con base en la evidente equidad y en los principios generales del derecho que deben ser aplicados a los nuevos hechos¹¹.

La finalidad de la indexación no es la de:

Establecer un incremento, o un mayor valor de la deuda original, sino evitar una disminución en el patrimonio del trabajador por el simple transcurso del tiempo y su depreciación monetaria con la cual fundamentalmente se está estableciendo la equidad y la justicia¹², y que al momento de su satisfacción o pago éste no resulte deficitario o incom-

8. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de Casación Laboral, Sentencia 20 de mayo de 1992.

9. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de Casación Laboral, Sentencia 5 de agosto de 1996.

10. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 18 de agosto de 1992.

11. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 18 de agosto de 1992.

12. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sección segunda, Sentencia 8 de abril de 1991.

pleto propiciándose, de tal suerte el enriquecimiento sin causa del deudor¹³.

Anteriormente, la fundamentación de la indexación:

No deviene de la simple equidad sino de la ley (art. 1.603 y 1.627 C.C.). Fuentes autónomas del derecho a la exigencia del pago completo de la obligación que, por lo demás, no es arbitrario, pues corresponde a la actualización de la obligación aparejada al índice de devaluación que definitivamente no corresponde a los valores deducidos en atención a la indemnización moratoria a los incrementos legales de algunas prestaciones sociales¹⁴.

La procedibilidad de la indexación para acreencias laborales exigibles e impagadas, es únicamente para:

aquellos casos en que la ley laboral no se haya ocupado de reconocer la compensación de perjuicios cuando por la mora de su solución o de dar a ese crédito de beneficio del reajuste automático y regular en relación con el costo de la vida¹⁵.

La naturaleza jurídica de la indexación no es:

13. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sección primera, Sentencia 4 de septiembre de 1995.
14. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sección primera, Sentencia 4 de septiembre de 1995.
15. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de Casación Laboral, Sentencia 20 de mayo de 1992.

*Al valorar
la jurisprudencia laboral
del Consejo de Estado,
sobre revaluación judicial
de acreencias,
al tener normatividad
egal que la regula y aplicar
directamente algunos
principios constitucionales
se avanza hacia
la generalización
de la aplicación
de la corrección monetaria
a los asuntos sometidos
a su jurisdicción*

de salario ya que ...no es una clásica retribución de servicios...; ni de prestación social ...porque no fue establecida para amparar otras necesidades del trabajador derivadas de la prestación del servicio...; ni de bonificación ...por cuanto no proviene de una liberalidad del empleador..., dado que se origina en ...la existencia de una deuda y su depreciación... y ...su propósito primordial es mantener la capacidad adquisitiva de la moneda... Tampoco ...corresponde exactamente a una sanción por cuanto no está enfocada a reprender a una de las partes sino que pretende que las acreencias laborales a que tienen derecho los trabajadores se solucionen actualizadas o sea que en ese momento no hayan perdido su

valor adquisitivo¹⁶.

La indexación es carácter excluyente y residual (incompatibilidad¹⁷) de la revaluación judicial de acreencias o derechos laborales (indexación), frente al reconocimiento de una indemnización de perjuicios o una actualización legal, ya que:

cuando el empleador no cancela en su debida oportunidad las acreencias laborales a su cargo distintas a aquellas donde la propia ley ha impuesto una sanción o donde ha recibido el

16. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sección segunda, Sentencia del 18 de febrero de 1994.
17. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de Casación Laboral, Sentencia 20 de mayo de 1992.

beneficio del reajuste por disposición legal, es procedente la corrección monetaria como factor del daño emergente para que en el momento de su solución el pago sea completo (art. 1649 C.C.)..., sobre el supuesto del origen indemnizatorio de la indexación que cubre ...los perjuicios derivados del incumplimiento del empleador, sin que jurídicamente sea válida la condena simultánea...¹⁸ de la indexación y una indemnización (el resaltado no hace parte de la cita textual).

En 1996 se presenta una variación jurisprudencial, en tanto que la indexación sólo versaba sobre acreencias exigibles e impagadas que hayan padecido el efecto de la devaluación monetaria, por cuanto la jurisprudencia se fundamentaba en:

una modalidad de daño emergente entendido como el perjuicio que sufre el trabajador a raíz del retardo o mora del empleador en pagar el crédito laboral¹⁹, al ampliar el ámbito de ampliación de la revaluación judicial, a acreencias que, determinada en su cuantía con acomodo a una pauta legalmente establecida, aún no sea exigible, pero a la cual se proyectan indudablemente los efectos negativos de la devaluación de la moneda²⁰.

Como consecuencia del derecho a la moneda sana en un orden económico justo con presencia de la devaluación monetaria constante, y en el marco de la protección especial al trabajo en todas sus modalidades, la indexación en materia laboral es automática.

Tal es el caso, verbi gracia, del monto de una pensión acordada por las partes en una conciliación que tendrá exigibilidad varios años después, cuando se cumpla la condición de la edad de jubilación por vejez, en el que la Corte se inclinó mayoritariamente sobre la tesis que señala que la revaluación judicial no tiene por fundamento una modalidad de daño emergente sino "razones de justicia y equidad consagradas en los artículos 8o. de la Ley 153 de 1887 y 19 del C.S.T."²¹.

En conclusión, al valorar la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre revaluación judicial de acreencias sin ley que la regule, siendo ésta fundada en los principios de justicia y equidad (art. 8o. Ley 153 de 1887 y 19 de C.S.T.), y no en la aplicación analógica normativa de leyes que regulen casos o materias semejantes, como las de naturaleza civil sobre el pago y el daño emergente, se ha provocado una variación jurisprudencial que evidencia la crisis de la aplicación analógica de tales normas de naturaleza civil.

4. Jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, sobre la revaluación judicial de créditos con ley que la regule

La jurisdicción contencioso administrativa, que resuelve los conflictos jurídicos entre los empleadores

18. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sección segunda, Sentencia del 18 de febrero de 1994.

19. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de Casación Laboral, Sentencia 5 de agosto de 1996.

20. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sección primera, Sentencia 15 de septiembre de 1992.

21. Véase Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de Casación Laboral, Sentencia 5 de agosto de 1996.

estatales y sus trabajadores clasificados como empleados públicos, cuenta con una indexación regulada legalmente. Por tanto, al contrario de las soluciones judiciales que se presentan en la jurisdicción ordinaria laboral, en la contencioso administrativa éstas tienen soluciones indexadas de acuerdo a los siguientes criterios:

La indexación se origina en:

la concepción del Estado social de derecho que a nuestra república le imprimió la Constitución de 1991, dentro de cuyos fines está el respeto a la dignidad humana y al trabajo dentro de la vigencia de un orden justo, para lo cual le asignó a las autoridades la función de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, la corporación ha venido discutiendo acerca de la procedencia de decretar el ajuste de valor o indexación de las condenas que profiere esta jurisdicción, y dentro de tal dinámica así lo ha dispuesto cuando se trata de sumas fijas, llegando incluso a decretar oficiosamente su ajuste²².

La indexación en asuntos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo está regulada legalmente (art. 178 C.C.A.). Como resultado, una decisión que la decreta tiene sustento legal, y es también:

un acto de elemental equidad, cuya aplicación por parte del juez tiene soporte al más alto nivel de nuestro ordenamiento jurídico, como lo consagra expresamente la Carta en su artículo 230,

*La indexación
es una expresión
de la justicia conmutativa
que informa
la relación laboral,
ya que el no pago oportuno
y completo viola el derecho
fundamental del trabajador
a la remuneración*

en armonía con aquellos conceptos de la Constitución que, como atrás se dijo, le asignan a las autoridades la función de asegurar el cumplimiento de los fines sociales del Estado, el respeto a la dignidad humana y al trabajo, dentro de la vigencia de un orden justo... no disponer dicho ajuste... no sólo sería un agravio a la integridad patrimonial de quien ha resultado triunfante en el ejercicio de la acción judicial, sino un enriquecimiento sin causa de quien en su negativa de reconocer oportunamente

sus obligaciones, resulta haciendo a la poste una erogación menor a la que debía efectuar si hubiere cancelado en tiempo su obligación²³.

La indexación legal obedece:

al reconocimiento del hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que tratándose de servidores del Estado, fustiga y disminuye en forma continua el poder adquisitivo de sus ingresos²⁴.

La indexación es la obligación de:

la parte condenada a pagar el valor real de lo adeudado, en verdad no se le está imponiendo una sanción por su conducta renuente, ni se le está ocasionando un empobrecimiento, como tampoco un enriquecimiento a la parte gananciosa de la contención; se está obligando si a la

22. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, Sentencia 15 de noviembre de 1995.

23. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, Sentencia 15 de noviembre de 1995.

24. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, Sentencia 15 de noviembre de 1995.

parte que debe, a pagar lo que en su oportunidad se abstuvo de reconocer, asumiendo como consecuencia lógica que su conducta omisiva, los efectos que la devaluación ha producido en poder adquisitivo del dinero y que en forma injustificada paga tardíamente²⁵.

En 1995 se presentó una innovación jurisprudencial ya que:

hasta ahora se ha abstenido de decretar cuando lo reclamado es el pago de sumas que por mandato de la ley se reajustan periódicamente, como es el caso de las prestaciones sociales, tales como las pensiones de invalidez, de jubilación y vejez. Al examinar la situación de las aludidas prestaciones, la Sala observa que cuando su pago se posterga en el tiempo más allá de la oportunidad en que de acuerdo con la ley deben cancelarse, también son afectadas por la devaluación, y quienes las reciben tardíamente, ven menguada su capacidad de compra de bienes y servicios y, por ende, empobrecido su patrimonio²⁶.

En conclusión, al valorar la jurisprudencia laboral del Consejo de Estado, sobre revaluación judicial de acreencias, al tener normatividad legal que la regula (art. 178 C.C.A.) y aplicar directamente algunos principios constitucionales, se avanza hacia la generalización de la aplicación de la corrección monetaria a los asuntos sometidos a su jurisdicción.

5. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la revaluación de créditos laborales con fundamento en la aplicación directa de la Constitución

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la revaluación de acreencias laborales, con fundamento en la aplicación directa de la Constitución para

casos de control de constitucionalidad y de protección de derechos fundamentales (acción de tutela) con los siguientes criterios:

La indexación es el desarrollo del derecho constitucional a una moneda sana:

la Constitución no es indiferente a los fenómenos inflacionarios, en particular en materia laboral, pues la Carta, al consagrar la autonomía del Banco de la República, prácticamente ha reconocido una suerte de derecho constitucional a la moneda sana y, en especial, a la protección del poder adquisitivo de la remuneración laboral (CP arts. 48, 53 y 373)²⁷.

La actualización de acreencias pensionales será siempre una ecuación directamente proporcional al índice de precios al consumidor, pese a que legalmente, en ocasiones, esté vinculada al incremento del salario mínimo legal, herencia presente en la Ley 100 de 1993 (art. 14) que lo conservaba para las pensiones cuyo monto mensual fuese igual al salario mínimo mensual. No obstante, al ser analizada en control de constitucionalidad por la Corte, la declaró exequible con la condición:

que en el caso de que la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior a aquél en que se vaya a efectuar el reajuste de las pensiones, sea superior al porcentaje en que se incremente el salario mínimo mensual, las personas cuya pensión sea igual al salario

25. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, Sentencia 15 de noviembre de 1995.

26. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, Sentencia 8 de noviembre de 1995.

27. Corte Constitucional, Sentencia C-448 de 1996.

mensual vigente, tendrán derecho a que ésta se les aumente conforme a tal índice²⁸.

El principio realista de la actualización de créditos es vigente en:

una sociedad que tiene una economía inflacionaria como lo reconoce la misma Constitución en los artículos 373 y 53, el salario no puede ser una deuda de dinero. En realidad se trata de una deuda de valor. Es decir, la explicación del salario no se encuentra tanto en el principio nominalista como en el principio valorativo. Es porque las personas trabajan fundamentalmente para tener unos ingresos que les permita vivir en condiciones humanas y dignas. Por ello el salario se debe traducir en valor adquisitivo. Y si éste disminuye, hay lugar a soluciones jurídicas para readquirir el equilibrio perdido... si la constante es el aumento del índice de precios al consumidor, donde existe anualmente devaluación de la moneda de dos dígitos, se altera la ecuación económica si se admite un salario nominalmente invariable. Es por ello que el salario tiene que mantener su *valor intrínseco*, esto es, su poder adquisitivo... Luego, hay que lograr un valor en equidad. El artículo 53 de la Carta habla, precisamente, de la remuneración *móvil*. La Corte considera que ese calificativo no sólo comprende el salario mínimo sino a todos los salarios puesto que ello es una lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y comunicativa de la

*Al valorar
la jurisprudencia laboral
de la Corte Constitucional,
sobre revaluación
de acreencias,
ésta sin vacilación
ha generalizado la indexación
a toda clase de sentencias
que se profieran
contra entidades públicas
o privadas en las cuales
se condene
a los patronos.*

relación laboral, prueba de lo cual es el reajuste automático de todas las pensiones. Sería absurdo que *al trabajador pasivo* se le reajustara su pensión y no se le reajustara su salario *al trabajador activo*. Por consiguiente, si a un trabajador se le fija un salario y se mantiene el mismo guarismo por más de un año, a pesar de que la cantidad y calidad del trabajo permanecen inmodificables, mientras el valor del bien producido aumenta nominalmente, en razón de la depreciación de la moneda, se estaría enriqueciendo injustamente el empleador en detrimento del derecho que tiene el asalariado a recibir lo justo, y esto no sería correcto en un Estado,

una de cuyas finalidades esenciales es garantizar la vigencia de un orden justo²⁹.

Como consecuencia del derecho a la moneda sana en un orden económico justo con presencia de la devaluación monetaria constante y en el marco de la protección especial al trabajo en todas sus modalidades, la indexación en materia laboral es automática:

A juicio de la Corte, los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones, en el Estado y en las entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, tienen la obligación emanada de la Constitución Política, de establecer mecanismos aptos para el pago oportuno, cierto y completo de las sumas correspondientes en su totalidad, y tienen también a su cargo la obligación de

28. Corte Constitucional, Sentencia C-387 de 1994.

29. Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 1995.

reconocer intereses monetarios reales cuando incurran en mora en la cancelación de las mismas, aunque no haya sentencia judicial que así lo ordene³⁰.

La indexación es una expresión de la justicia conmutativa que informa la relación laboral (artículo 25 de la C.P.) ya que el no pago oportuno y completo viola el derecho fundamental del trabajador a la remuneración que:

es un derecho inalienable de la persona y, por ende, el pago del mismo es una obligación del patrono, que debe cumplir de manera completa y oportuna, a satisfacción del trabajador y de conformidad con lo acordado³¹.

La discusión sobre la indexación sin ley o revaluación judicial de los créditos laborales, que aún se presenta en la jurisdicción ordinaria laboral, es terminada por la Corte Constitucional al señalar:

Pero, no vacila en manifestar la Corte que las sentencias judiciales que profieran contra entidades públicas o privadas en las cuales se condene a los patronos, oficiales o particulares, deben ordenar la actualización de los valores que haya venido reteniendo el ente desde el momento en que el trabajador adquirió su derecho al pago hasta el instante en que éste se produzca efectivamente, y la cancelación de los intereses moratorios respectivos según tasas reales, sin perjuicio de los salarios caídos o de las sanciones que la ley consagra³².

El campo de aplicación de la obligación estatal de garantizar "el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales" (art. 53 C.P.):

30. Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 1996.

31. Corte Constitucional, Sentencia T-063 de 1995.

32. Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 1996.

no está referido solamente a la pensión como pensión, sino a la pensión como relación valor-trabajo, y, entonces, pago oportuno y reajuste son predicables a las remuneraciones debidas al finalizar la relación laboral, esto es coherente con la interpretación dada al artículo 12 del Convenio 95 de la OIT en el caso de los sindicatos portugueses* (relacionado anteriormente en esta sentencia) donde se dice que uno de los aspectos de protección al salario es el de tomar medidas adecuadas para reparar los perjuicios ocasionados por la demora en el pago³³.

En conclusión, al valorar la jurisprudencia laboral de la Corte Constitucional, sobre revaluación de acreencias, ésta sin vacilación ha generalizado la indexación a toda clase de sentencias que se profieran contra entidades públicas o privadas en las cuales se condene a los patronos.

6. Elementos para la crítica a la jurisprudencia de la indexación

La plenitud del ordenamiento jurídico no proviene de las normas de rango legal. Por más perfecto que intente ser un sistema legal, siempre existirán vacíos, bien porque no contemplan situaciones, ora porque no las podían contemplar al momento de su expedi-

* "La Confederación General de los Trabajadores Portugueses reclamó por la demora en pagar salarios a 143.190 trabajadores particulares y 65.474 del sector oficial. El Comité de la OIT consideró que la aplicación efectiva del convenio de protección al salario comprende tres aspectos: el control, las sanciones y las medidas destinadas a reparar los perjuicios sufridos, y formuló como recomendaciones la prescripción de sanciones apropiadas y vías de recurso aceleradas y eficaces para que el trabajador pueda recuperar rápidamente en su totalidad las sumas que se les adeudan en concepto de salario incluidas las garantías en caso de quiebra o de liquidación judicial de la empresa" (*Boletín Oficial*, Vol. LXVIII, 1985).

33. Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 1994.

ción, o porque las transformaciones sociales, económicas y políticas ocasionan la metamorfosis de las situaciones reguladas. Precisamente en un Estado social de derecho, la función de los jueces es la solución pacífica, constitucional y racional (no arbitraria) de los conflictos sometidos a su estudio, el operador judicial que reconozca vacíos legales los debe superar ejercitando el principio de integración normativa. Así lo ha sentenciado la Corte Constitucional al señalar que “en el derecho no hay lagunas, porque hay jueces”³⁴.

Como la jurisprudencia sobre indexación en materia laboral tiene su mayor obstáculo en la jurisdicción ordinaria laboral, por carecer de una norma que la regule, por lo señalado en los acápites 3 y 5 de este escrito, se puede inferir que existen dos caminos para superar los vacíos legales sobre la indexación: el seguido por la Corte Suprema aplicando indexación fundamentada en razones de justicia y equidad, y el seguido por la Corte Constitucional en aplicación directa de la Constitución.

6.1. La crisis de la aplicación analógica normativa para evitar la aplicación directa de la Constitución

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sobre la temática de la indexación sin ley, (genéticamente formada con una Constitución que no consagraba el derecho a la indexación, por tanto, requería de la aplicación analógica de una norma que la regulase) debe transformarse en una que aplique directamente la Constitución que estatuye la indexación. Esa transformación debe reconocer como fundamento jurídico de la indexación a la propia Constitución y no sólo —como lo sigue haciendo, después de más de un lustro de vigencia de ésta— los principios de justicia y equidad

consagrados en los artículos 8 de la Ley 153 de 1887 y 19 del C.S.T.³⁵.

Para la Sala Plena Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en materia de indexación hizo crisis la aplicación analógica de la normatividad, ya que el operador jurídico ha dejado de aplicar la indexación con fundamento en “una modalidad de daño emergente, entendido como el perjuicio que sufre el trabajador a raíz del retardo o mora del empleador en pagar un crédito laboral”³⁶, razonamiento *per analogiam* que deviene de la regulación civil sobre el pago de obligaciones y el riesgo que asume el deudor. Tal analogía es inconsistente por cuanto en la regulación laboral los riesgos siempre están en cabeza del patrono, dado que el trabajador con relación al empleador “nunca puede asumir sus riesgos” (art. 28 C.S.T.), mucho menos aquellos que provienen de una permanente devaluación monetaria, totalmente independiente de su voluntad y de su régimen de obligaciones.

Atrás quedó la aplicación analógica de la normatividad de naturaleza civil, entendida como:

la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquellos que explican y fundamentan la *ratio juris* o razón de ser de la norma. La consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio de la igualdad, base a la vez de la

34. Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 1995.

35. Así lo evidencia la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de Casación Laboral, Sentencia del 5 de agosto de 1995, ya citada en este escrito.

36. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena Laboral, Sentencia del 5 de agosto de 1996.

justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual... En la analogía se binda al juez un fundamento para crear derecho, pero ese fundamento se identifica con la ley misma que debe aplicar. El juez que apela al razonamiento *per analogiam* no hace, pues, otra cosa que decidir que en una determinada situación, es el caso de aplicar la ley³⁷.

Con todo, la salida a la crisis de la aplicación analógica normativa de una modalidad de daño emergente no fue la aplicación directa de la Constitución, sino la aplicación de "razones de justicia y equidad consagradas en los artículos 80. de la Ley 153 de 1887 y 19 del C.S.T."³⁸.

Salida que corresponde a criterios hermenéuticos originados desde la expedición de la Constitución de 1886 (art. 52)³⁹ y la Ley 57 de 1887 (arts. 40. y 70.)⁴⁰, con la cual el sistema jurídico colombiano experimentó un vacío constitucional, que hacía necesario y urgente que una regulación jerárquicamente inferior y expedida en tiempos preconstitucionales, fuera modificada expresamente por la misma Constitución, al incorporar parte del texto constitucional a aquella normatividad. Se dio origen a una hermenéutica limitada a lo legal, que soslaya lo constitucional a tal punto, que de manera explícita reconoce que la

Constitución "tiene también fuerza legal" (art. 70. Ley 153 de 1887). Tal hermenéutica aún se manifiesta, en diversos campos del derecho, y en el derecho laboral, de forma específica en la temática de la indexación o actualización de las acreencias laborales. Para esta hermenéutica, la doctrina constitucional tan sólo sirve para "fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes" (art. 50. Ley 153 de 1887). Y para una aplicación normativa analógica, pero sólo de manera residual ante la inexistencia de "leyes que regulen casos o materias semejantes" (art. 80. Ley 153 de 1887).

Es en este contexto donde se explica cómo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, jurisprudencialmente recurra a razones de justicia y equidad, evitando así la aplicación directa de la Constitución.

6.2. La aplicación directa de la Constitución y sus silencios

Pese a los significativos avances en la jurisprudencia que versa sobre la actualización de los créditos laborales, en especial por las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativa, evidentemente existen varios principios, valores, deberes y derechos de rango constitucional que aún no han sido vinculados en la conceptualización de esta materia; sin pretender agotarlos mencionaremos los siguientes:

1. El derecho de la población a la primacía e integridad de la Constitución (arts. 40 y 241 C.P.). Como arriba se expresó la indexación de créditos laborales es de rango constitucional y como tal tiene primacía sobre

37. Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 1995.

38. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena laboral, Sentencia del 5 de agosto de 1996.

39. Artículo 52 de la Constitución de 1886: "Las disposiciones del presente título se incorporarán en el Código Civil como título preliminar, y no podrán ser alteradas sino por acto reformatorio de la Constitución".

40. Ley 57 de 1887, art. 4: "Con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la República, declárase incorporado en el Código Civil el título III (arts. 16-52) de la misma Constitución. Ley 57 de 1887, art. 7: "El título II de la Constitución sobre

'derechos civiles y garantías sociales', tiene también fuerza legal, y, dentro de las leyes posteriores a la Constitución, la prioridad que le corresponde como parte integrante y primordial del Código Civil".

los demás ordenamientos de estirpe legal que la regulan, así como también los que regulan el pago de las obligaciones.

2. El deber de las personas, incluidos los empleadores y juzgadores, de acatar y cumplir la Constitución (art. 95 C.P.). Dentro del elenco de deberes de las personas, el acatamiento de la Constitución es primordial para la vigencia de un orden justo, y al ser la indexación de rango constitucional su acatamiento es deber de los empleadores y de los administradores de justicia.

3. El deber de las personas, incluidos los empleadores, de respetar los derechos ajenos (art. 95.1 C.P.). La indexación de rango constitucional como derecho de los trabajadores a no perder valor sus acreencias, frente a los empleadores se convierte en la obligación de respetar el derecho ajeno, con conductas como el pago oportuno y completo de las acreencias laborales.

4. El deber de las personas, incluidos los empleadores, de no abusar de sus derechos (art. 95.1 C.P.). Los empleadores en ejercicio de sus derechos o potestades patronales, no pueden abusar de ellos, en especial cuando sin motivos justificados o razonables dejan de cancelar las acreencias laborales.

5. El principio de un marco jurídico democrático que garantice un orden social y económico justo (preámbulo constitucional). Pese a las importantes referencias jurisprudenciales al mandato constitucional de

“La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sobre la temática de la indexación sin ley (genéticamente formada con una Constitución que no consagraba el derecho a la indexación, por tanto, requería de la aplicación analógica de una norma que la regulase), debe transformarse en una que aplique directamente la Constitución que estatuye la indexación”

la construcción de un orden justo, la garantía de la existencia misma de un marco jurídico constitucional, garante de un orden social y económico justo, no es erigida como regulación protectora aplicable directamente ante los efectos de la devaluación monetaria.

6. El fin esencial del Estado de promover la prosperidad general (art. 2o. C.P.). Las doctrinas jurisprudenciales que fundamentan la indexación laboral, en un enriquecimiento sin causa del deudor de acreencias laborales provocado por la devaluación monetaria, aún no han sido relacionadas con el fin esencial del Estado de promover la prosperidad general, en especial el papel de los juzgadores como integrante del Estado en ese fin esencial, o por lo menos en evitar el empobrecimiento de un importante segmento poblacional como son los trabajadores.

7. El derecho fundamental a la subsistencia (de construcción jurisprudencial⁴¹). “Aunque la Constitución no consagra la subsistencia como derecho, éste puede colegirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social, ya que la persona requiere un mínimo de elementos materiales para subsistir”, siendo que para garantizar la subsistencia suya y de su familia, trabaja o recibe la pensión debe vincularse a la indexación.

41. Corte Constitucional, Sentencia T-015 de 1995.

6.3. La aplicación directa de la Constitución a falta de ley

Por la claridad absoluta, es válida la transcripción de una cita textual extensa sobre la aplicación directa de la Constitución a falta de ley, como es el caso de la indexación en los conflictos que conoce la jurisdicción ordinaria laboral:

Las normas de la Constitución política, y esta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen al tratar el ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley.

Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley.

Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia,

*Dentro del elenco
de deberes de las personas,
el acatamiento
de la Constitución
es primordial para la vigencia
de un orden justo,
y al ser la indexación
de rango constitucional
su acatamiento es deber
de los empleadores
y de los administradores
de justicia.*

hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo (art. 241 C.P.)⁴².

Con un numeroso elenco de sentencias de la Corte Constitucional sobre la indexación con rango constitucional, algunas referenciadas ya en este texto, no es comprensible como máximo juzgador de lo ordinario laboral, no aplicar directamente la Constitución, más aún cuando

El Estado-juez, en la tarea de aplicación del derecho al caso concreto, debe otorgar prioridad al derecho sustancial y mediante interpretación privilegiar la solución que promueva en mayor grado la igualdad real y efectiva. Estos mandatos específicos contenidos en los artículos 13 y 228 de la Constitución enmarcan el decisivo papel que el juez debe cumplir en el Estado social de derecho. El juez como defensor y promotor de los derechos reniega de su función en el Estado social de derecho cuando a través de sus actos o abstenciones, lejos de ser el artífice y constructor de un orden justo, lesiona los derechos que debería tutelar⁴³.

42. Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 1995.

43. Corte Constitucional, Sentencia T-06 de 1992.

Ante este mapa general, de una escala inmensa sobre la indexación de derechos laborales en la jurisprudencia nacional, donde los detalles de ella no fueron susceptibles de reconocimiento, ya que sólo lo muy significativo apareció en él, resuena la denuncia de aquel magistrado que lamentaba:

Por todo lo anterior, las numerosas alusiones al trabajo como derecho constitucional fundamental y al respeto a la dignidad humana como elemento esencial del Estado social de derecho no han bastado para ocultar la cruda realidad nacida de este fallo poco afortunado donde la justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales constitucionales no resultaron bien librados, por todas las razones someramente expuestas. Ha sido pues, lamentablemente, un caso más de *flactus vocis*⁴⁴.

Bibliografía

CONTI, Agosto. "Corrección monetaria y mesadas pensionales". En *Actualidad Laboral*, No. 77. Santafé de Bogotá, 1996.

_____. "Observaciones sobre indexación". En *Actualidad Laboral*, No. 21. Bogotá, 1987.

CONSEJO DE ESTADO. Sentencias referenciadas en los pies de página.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias referenciadas en los pies de página.

GÓNGORA, Carlos. "El fenómeno de la indexación en materia laboral". En *Actualidad Laboral*, No. 37, Bogotá, Legis, 1990.

HIRSCHBER, Eliyahu. *El principio nominalista*. Buenos Aires, Astrea, 1976.

URIBE RESTREPO, Fernando. *Indexación de obligaciones*. Bogotá, Temis, 1982.

VALDES SÁNCHEZ, Germán. "Apuntes doctrinarios sobre indexación". En *Derecho Social*, No. 37. Bogotá, Colegio de Abogados de Trabajo, 1994.

VARGAS OSORNO, Ramiro. "El salario y la corrección monetaria". En *Derecho del Trabajo*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1994.

KENDY GUEFIENKEL, Lilian. *Depreciación monetaria*. Buenos Aires. De Palma, 1977.

ZANNONI, Eduardo. *Revaluación de obligaciones dinerarias*. Buenos Aires, Astrea, 1976.

44. Corte Constitucional, Sentencia T-407 de 1992. Salvamento de voto del magistrado Ciro Angarita Barón.